

Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del párrafo segundo de su motivo duodécimo, que se suprime; asimismo, se elimina el considerando decimotercero.

Y teniendo, en su lugar, y, además, presente:

Primero: Que la parte demandante dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, que funda en la falta de servicio de la demandada, por cuanto no proporcionó implementos y medidas de seguridad que permitieran, por un lado, evitar el ilícito del cual fue víctima; y, por otro, otorgarle el auxilio oportuno a las lesiones que sufrió como consecuencia de aquello.

El fallo rechazó la demanda, no obstante haber tenido por establecido que el actor sufrió un robo al interior del Parque Metropolitano de Santiago, al estimar que no acreditó la falta de servicio, pues entiende que le correspondía al demandante probar que la demandada no contaba con medidas de seguridad adecuadas para evitar y prevenir la comisión de ilícitos, ni tampoco demostró no haber recibido ninguna clase de ayuda luego del hecho dañoso.

Segundo: Que, como es sabido, nuestro sistema procesal civil tiene como fundamento el principio de inexcusabilidad, en cuanto cláusula que impide al tribunal, una vez requerido legalmente y en negocios de su competencia, eludir la decisión sometida a su conocimiento; lo que procede, no solamente en el evento de la existencia de una laguna legal, pues también excluye la posibilidad de declaración de *non liquet* por falta de prueba, es decir, la ausencia de medios de convicción tampoco libera al juez de su deber de pronunciamiento de fondo, quien podrá establecer los hechos materia de la controversia, no sólo con el mérito de la prueba efectivamente rendida, sino también con la falta de ella, mediante la dinámica que proponen las reglas que distribuyen la carga de la prueba, las que por criterio general, consagran que dicho *onus* le corresponde a la parte que alega el hecho que le favorece, de modo que, si aquel que debía demostrar una determinada circunstancia fáctica, no lo hace, tal situación no puede entenderse como probada, pudiendo acarrear, eventualmente, que con ello, el hecho contrario quedaría demostrado. En síntesis, las reglas de la carga de la prueba, desde una perspectiva judicial, es la que le indica al tribunal como fallar cuando no se han acreditado ciertos hechos.

Tercero: Que, en su relato, para fundamentar su acción, el demandante expresa dos situaciones acaecidas el día 21 de noviembre de 2018 que le provocaron daño. Por un lado, indica que a las 10:30 horas de la mañana de esa



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKYGXUQHEPU

data, ingresó en bicicleta la Parque Metropolitano para realizar su entrenamiento, y en su interior, fue interceptado por dos sujetos que lo derribaron con gran violencia despojándolo de sus pertenencias; por otro lado, indica que como consecuencia de dicha acción, quedó herido, pero no recibió ayuda alguna de funcionarios de la demandada, y que sólo media hora después, otro ciclista que se desplazaba en el sector lo encontró, llamando a carabineros, por lo que la primera atención profesional fue después de 45 minutos de acaecidos los hechos.

De este modo, le atribuye a la demandada falta de servicio, al no cumplir con su deber de tomar medidas suficientes que prevengan situaciones como la sufrida; y, al no prestar ayuda posterior a los hechos relatados, incumplimientos que como consecuencia, le generaron los daños que reclama.

Por su parte, la demandada controvierte el libelo pretensor, afirmando que si cuenta con medidas de seguridad suficientes y que si prestó ayuda oportuna al actor.

Cuarto: Que, de este modo, conforme la regla general del *onus probandi*, que se extrae de lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, al señalar que “*Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta*”, aparece que al actor le correspondía demostrar la veracidad de las circunstancias fácticas relatadas, esto es, el hecho de haber sido víctima de un robo en instancias que se desplazaba en su bicicleta por el Parque Metropolitano, perdiendo sus pertenencias, y sufriendo el daño que alega, como su naturaleza y monto.

Por su parte, a la demandada le correspondía acreditar que cumplió correctamente con el servicio que le corresponde, dada su calidad de entidad perteneciente a la administración del Estado, en los términos que afirma en su contestación de la demanda.

Quinto: Que al igual que el sentenciador *a quo*, esta Corte estima suficientemente probado que el día de los hechos, el actor, mientras se desplazaba en su bicicleta, al interior del Parque Metropolitano, fue asaltado por dos desconocidos, quienes lo derribaron de la misma, arrebatándole sus pertenencias, y dándose a la fuga, provocándole lesiones al demandado. Por lo demás, ello no fue controvertido por la demandada, y además, así fluye del mérito del parte denuncia 10591 suscrito el día de los hechos.

Sexto: Que, así las cosas, le correspondía a la demandada demostrar que si cumplió con las exigencias que le exige el servicio público que debe prestar, indicando en la contestación, por un lado, que mantiene guardias de seguridad, cámaras de video vigilancia y guardaparques; y por otro, que auxilio oportunamente al actor.



Sin embargo, no obstante corresponderle el *onus* probatorio en dicho sentido, no rindió prueba alguna durante el proceso para demostrar sus asertos, de manera que debe tenerse por establecida la falta de servicio en los mismos términos que el fallo en alzada afirma en sus motivos cuarto al séptimo; en efecto, al no demostrar el cumplimiento de los deberes que la propia demandada afirma haber satisfecho, de manera tal, que los daños que puedan establecerse como consecuencia de la acción u omisión de la demandada, deberán ser respondidos por ésta.

Séptimo: Que en relación a los daños por cuya indemnización se acciona, el actor solicita que el demandado responda por los siguientes conceptos:

Por daño emergente, solicita se cubran los gastos por los costos materiales cuya pérdida sufrió, esto es, el valor de su bicicleta y telefono celular, los montos gastados por concepto de terapias y gastos médicos y bonos del empleador, por un total de \$4.298.110.

También demanda lucro cesante, por el período de 24 meses en que no pudo ejercer su profesión de diseñador gráfico, que avalúa en la suma de \$1.200.000.-

Finalmente, solicita daño moral por la suma de 10 millones de pesos, fundado en los perjuicios físicos y sicológicos.

Octavo: Que la única prueba rendida en autos, corresponde a la documental consistente en el parte denuncia ya mencionado anteriormente.

También se acompaña “Protocolo operatorio N° 159438”, de fecha 10 de diciembre de 2018, emitido por el Servicio de Traumatología de Complejo Hospitalario San José, a nombre del actor, en que se indica que su diagnóstico pre operatorio es “FX Plátillos Tibiales lado derecho, en una intervención quirúrgica que se prolongó por más de 4 horas.

Se adjunta, además, hoja de Indicaciones Médicas y de Enfermería, de 3 de noviembre de 2020, emitida por Hospital San José, a nombre del actor, que indica tratamiento farmacológico que debe seguir.

Finalmente, acompaña copia de diez bonos de atención ambulatoria, emitido por Fonasa, a nombre del actor, entre los días 25 de enero y 5 de noviembre de 2019, por diversas prestaciones, consistentes en masoterapia, evaluaciones y pruebas de esfuerzo. Se indica en ellos, el pago que el actor debió realizar, que en total, asciende a la suma de \$701.750.-



Noveno: Que, en relación al daño emergente, la única prueba rendida útil para acreditar los gastos incurridos por el actor como consecuencia del hecho materia de autos, corresponde a los bonos que debió pagar por diversas atenciones terapéuticas, los cuales, aunque corresponden a documentos privados que emanan de un tercero, son suficientes, a juicio de esta Corte, para configurar una presunción que, reuniendo las calidades de gravedad y precisión, pueda otorgar plena prueba acerca de que el actor debió desembolsar la suma de \$701.750 como consecuencia de la falta de servicio de la actora, por lo que la demanda será otorgada en este aspecto.

Al no rendirse prueba en relación al valor de las especies sustraídas y demás ítems del capítulo analizado, no serán otorgados los valores demandados.

Décimo: Que respecto el lucro cesante, no hay elemento probatorio alguno que permita establecer adecuadamente, la existencia de siquiera de sus fundamentos básicos, por lo que será desestimada la acción en este aspecto.

Undécimo: Que, en relación al daño moral, la parte demandante lo hace residir en el dolor tanto físico como psicológico que le trajo el hecho materia de autos.

Para su prueba, acompañó el parte policial antes referido, que da cuenta de la recepción por parte de carabineros de un comunicado radial por la presencia de una persona –el actor– lesionado en el sector camino a la montaña, víctima de un robo. Se indica, además, respecto las lesiones, que debió realizarse una cirugía. Se adjuntan, además, los bonos de Fonasa, ya mencionados, los que dan testimonio de la ejecución de actividades terapéuticas compatibles con lesiones como las que refiere el actor. También se aparejó el protocolo operatorio antes mencionado, que da cuenta de la cirugía que debió realizarse el demandante.

Tales antecedentes, a juicio de esta Corte, son suficientes para tener por demostrado que el actor, debido a la falta de servicio de la demandada, sufrió lesiones que le provocaron la necesidad de una intervención quirúrgica que se extendió por poco más de dos horas, y de acciones terapéuticas posteriores que se prolongaron al menos, hasta el 5 de noviembre de 2019, de las que es posible concluir indicios que permiten presumir de manera grave y precisa en los términos del inciso segundo del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, que el actor sufrió un dolor físico y moral, consecuencia de las lesiones sufridas con ocasión de los hechos de autos.



Duodécimo: Que de este modo, acreditado el daño moral que la falta de servicio establecida le provocó al demandante, corresponde fijar dicho perjuicio, teniendo en consideración, que tal detrimento, al ostentar una naturaleza extra patrimonial, es imposible de valorizar de modo exacto, correspondiendo su regulación prudencial, para lo cual esta Corte, tendrá en consideración las circunstancias en que se desarrollaron los hechos materia de autos, en especial, el hecho de que el actor se encontraba en una situación de desamparo, bajo la esfera de protección de la demandada, y que las lesiones sufridas, requirieron intervención quirúrgica.

Considerando tales elementos, a juicio de esta Corte, el monto con el cual se puede compensar el detrimento extra patrimonial reclamado, no puede ser inferior a \$1.000.000.-, monto por el cual, la demandada será condenada, acogándose la acción deducida en su contra.

Y de conformidad con lo dispuesto en los preceptos citados y lo previsto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que **se revoca** la sentencia impugnada de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada por el 4º Juzgado Civil de Santiago, que desestimó la demanda impetrada, y en su lugar, se declara que **se la acoge**, sólo en cuanto se condena a la demandada, a pagar por concepto de daño emergente la suma de \$701.750 (setecientos un mil setecientos cincuenta pesos) y por el moral provocado por la falta de servicio incurrida, la suma de \$1.000.000 (un millón de pesos), la que deberá reajustarse de acuerdo a la variación que experimente el IPC, desde que el fallo quede ejecutoriado y hasta el pago íntegro de lo adeudado, y se aplicarán intereses legales, desde que la demandada se constituya en mora de pagar y hasta la fecha de solución efectiva.

Redactada por el ministro Martínez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Nº 16902-2022-Civil.

Pronunciada por la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada con los ministros Patricio Martínez Benavides, Claudia Lazen Manzur y Beatriz Cabrera Celsi.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKYGXUQHEPU

No firman los ministros Patricio Martínez Benavides por encontrarse en comisión de servicio y la ministra (s) Beatriz Cabrera Celsi por haber cesado en sus funciones como ministra (s).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKYGXUQHEPU

Proveído por la Presidenta de la Decimotercera (zoom) Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UKYGXUQHEPU